

Acuerdos Internacionales para el Traslado de Refugiados y Solicitantes de Asilo

Introducción

1. Esta guía proporciona asesoramiento y consideraciones de relevancia global para informar los acuerdos de cooperación entre Estados en materia de asilo y garantizar su coherencia con el derecho internacional de refugiados y de derechos humanos. En particular, tiene como objetivo informar el desarrollo e implementación de acuerdos de cooperación estatal en relación con el traslado de refugiados y solicitantes de asilo a un tercer país, en caso de que los Estados consideren tales acuerdos. Esta guía describe la base legal para tales acuerdos, así como su alcance y contenido, y debe leerse junto con las posiciones y guías del ACNUR ya existentes sobre temas relacionados y en las que se basa.¹ También subraya la importancia del principio de responsabilidad compartida y la cooperación internacional como elementos esenciales para la legalidad y viabilidad práctica de estos acuerdos. Esta orientación describe además el papel potencial del ACNUR en el desarrollo, conclusión, implementación y supervisión de acuerdos de traslado conforme a su mandato de proporcionar protección internacional a los refugiados y su responsabilidad supervisora para la aplicación de instrumentos del derecho de las personas refugiadas.

2. El ACNUR ha tenido durante mucho tiempo el objetivo de apoyar respuestas eficaces a los desafíos de los movimientos² sucesivos, mediante la emisión de orientación jurídica y política, así como la implementación de enfoques operacionales prácticos y basados en derechos; que aseguren que la protección internacional sea accesible y eficaz.³ ACNUR mantiene su posición de que las solicitudes de asilo deberían tramitarse normalmente en el territorio del Estado de llegada y considera, a su vez, que es esencial proporcionar orientación

¹Véase particularmente ACNUR, *Nota de orientación sobre los acuerdos bilaterales y /o multilaterales sobre el traslado de solicitantes de asilo* <https://www.refworld.org/es/pol/posicion/acnur/2013/es/16943>, mayo de 2013, . ACNUR, *Consideraciones legales sobre el acceso a la protección y la relación entre las personas refugiadas y el tercer país en el contexto del retorno o traslado a terceros países seguros*, abril de 2018, <https://www.refworld.org/es/pol/posicion/acnur/2018/es/127549>. ACNUR, *Nota de orientación sobre los movimientos sucesivos irregulares de refugiados y solicitantes de asilo* <https://www.refworld.org/es/pol/npiacnur/acnur/2019/es/123059>, . Estas posiciones siguen siendo válidas y deben leerse junto con la presente orientación.

² Los “movimientos sucesivos” se refieren a los movimientos de refugiados y solicitantes de asilo que ocurren de un país en el que tenían protección internacional, o en el cual podrían haber solicitado y recibido tal protección, hacia otro país donde pueden solicitar dicha protección. Véase la Nota de orientación de ACNUR sobre los movimientos sucesivos irregulares, en la nota 1 *supra*, que analiza el desplazamiento de refugiados y otras personas a las que se les ha reconocido protección internacional (incluidas formas subsidiarias u otras formas complementarias de protección internacional), que se mueven y buscan protección en otro Estado, así como solicitantes de asilo que solicitan protección internacional en un Estado y que han buscado o podrían haber buscado, protección en un Estado anterior. En cuanto a la definición de personas que buscan o necesitan protección internacional, véase ACNUR, *Personas que necesitan protección internacional*, junio de 2017, <https://www.refworld.org/es/ref/infortem/acnur/2017/es/121440>. A los efectos de la presente Orientación, el término ‘Estado actual’ o ‘Estado/país de acogida actual’ se refiere al Estado en el que un solicitante de asilo o refugiado se encuentra físicamente presente y/o donde ha solicitado más recientemente protección internacional. ‘Estado que traslada’ se refiere a un Estado actual o Estado de acogida actual que busca trasladar a refugiados y solicitantes de asilo a otro Estado. ‘Tercer país/Estado’ se refiere a un Estado donde los refugiados y solicitantes de asilo habían encontrado, podrían haber encontrado, o pueden encontrar protección internacional, y adonde están siendo trasladados.

³Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, *Conclusión No. 58 (XL): Problema de los refugiados y de los solicitantes de asilo que abandonan de manera irregular un país en el que ya habían encontrado protección*, 13 de octubre de 1989, <https://www.refworld.org/es/pol/excomcon/excom/1989/es/114502>. ACNUR, *El Plan de los 10 Puntos en Acción, Actualización 2016, Capítulo 8: Abordar los Movimientos Secundarios*, diciembre de 2016, www.refworld.org/policy/strategy/unhcr/2016/en/114091. Véase también la orientación del ACNUR descrita en la nota 1 *supra*.

específica para garantizar la implementación legal y basada en derechos de los acuerdos de traslado, en caso de que los Estados consideren tales medidas como parte de las respuestas más amplias a los desafíos planteados por los movimientos sucesivos de refugiados y solicitantes de asilo. Tales acuerdos deben consagrar las salvaguardas y garantías proporcionadas en esta guía, incluyendo las relacionadas con el principio de responsabilidad compartida.

3. Las personas que solicitan asilo en un Estado pueden ser trasladadas legalmente por ese Estado a un tercer país que se considere seguro para ellas y donde puedan encontrar protección internacional que sea accesible y efectiva.⁴ Esto aplica para los solicitantes de asilo que estuvieron en el tercer país, para las personas que transitaban por ese país y no solicitaron protección internacional, y para las personas que solicitaron asilo pero cuyas solicitudes no fueron previamente evaluadas por ese país. También incluye a los solicitantes de asilo que no estuvieron en el tercer país, y que no tienen ningún vínculo o conexión significativa con ese país, pero que, tras su traslado, pueden encontrar protección internacional allí. Finalmente, incluye a refugiados y otras personas a las que ya se les reconoció protección internacional en el tercer país (el primer país de asilo), siempre que dicha protección siga siendo accesible y efectiva y su estancia en el tercer país sea legal.⁵ Las transferencias legales no deberían incluir transferencias de personas que hayan sido formalmente reconocidas como refugiadas, o que hayan recibido otro tipo de protección internacional por parte del Estado de acogida actual. Dichas personas no deberían ser trasladadas a un tercer país y deberían tener residencia legal en el país de acogida actual.⁶

La base legal para los traslados de refugiados y solicitantes de asilo

4. Un acuerdo entre Estados para el traslado de refugiados y solicitantes de asilo se debería regir mediante un acuerdo internacional jurídicamente vinculante —bilateral o multilateral— que sea impugnabile y ejecutable ante un tribunal de justicia, incluso por parte de los refugiados y solicitantes de asilo afectados.⁷ Los acuerdos internacionales entre Estados que regulan el traslado de refugiados y solicitantes de asilo proporcionan un marco jurídico claro y vinculante, estableciendo las normas pertinentes, permitiendo que dichos traslados se produzcan de conformidad con el derecho internacional. Los acuerdos deberían establecer las condiciones bajo las cuales pueden producirse los traslados, las

⁴ Las Consideraciones legales de 2018, nota 1 *supra*, resumen la posición del ACNUR sobre los requisitos para evaluar la seguridad en el tercer país y el acceso a la protección para refugiados y solicitantes de asilo que están siendo trasladados, mientras que la Nota de Orientación de 2013 sobre acuerdos de traslado bilaterales y/o multilaterales de solicitantes de asilo, nota 1 anterior, establece los principios clave que son aplicables cuando se realizan acuerdos para trasladar solicitantes de asilo entre Estados. Como se señaló anteriormente, estas posiciones siguen siendo válidas y deben leerse en conjunto con la presente orientación.

⁵ El concepto de “primer país de asilo” se aplica generalmente en casos donde una persona ya ha encontrado, en un Estado anterior, protección internacional que continúa siendo accesible y efectiva. Véase: Consideraciones Legales 2018, nota 1 *supra*, párr. 3. En cuanto a la legalidad de la estancia en el país, véase el párrafo 8, nota al pie 11 de esta orientación. Véase también la Nota de orientación sobre los movimientos sucesivos irregulares, nota 1 *supra*, párr. 33, en cuanto a las obligaciones continuas del primer país de asilo con respecto al refugiado, incluida la obligación de readmitir al refugiado.

⁶ El traslado de refugiados reconocidos por el actual Estado de acogida está sujeto a normas estrictas relativas a la expulsión de refugiados bajo el Artículo 32, *Convención sobre el Estatuto de los Refugiados* (28 de julio de 1951) 189 UNTS 137, <https://www.refworld.org/es/leg/trat/agonu/1951/es/39821>.

⁷ Véase la Nota de orientación sobre los acuerdos bilaterales y/o multilaterales sobre el traslado de solicitantes de asilo, nota 1 *supra*, párr. 3(v). Por tanto, sería deseable un “acuerdo internacional” celebrado entre Estados en forma escrita, independientemente de la descripción, título o forma en que esté redactado el acuerdo. Tal acuerdo estaría regido por el derecho internacional y será vinculante para los Estados participantes. Véase *Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados* (23 de mayo de 1969) 1155 UNTS 331.

responsabilidades específicas de los Estados participantes y los criterios y salvaguardas necesarios para garantizar los derechos y la seguridad de las personas afectadas. Tales acuerdos, cuando se desarrollan e implementan correctamente, pueden promover la gestión eficaz de los movimientos sucesivos, reducir los riesgos asociados con viajes peligrosos, contribuir al principio de responsabilidad compartida y fortalecer la cooperación internacional, al tiempo que respetan los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo.

5. Los acuerdos internacionales para el traslado de refugiados y solicitantes de asilo deben estar disponibles públicamente y ser incorporados en el ordenamiento jurídico nacional de los Estados participantes, para garantizar la rendición de cuentas y proporcionar claridad a los refugiados y solicitantes de asilo afectados sobre sus derechos garantizados por ley. Tales acuerdos ofrecen certeza jurídica para los Estados participantes y las personas afectadas, mejorando así la eficacia, equidad y durabilidad del acuerdo.

El alcance y contenido de los acuerdos para el traslado de refugiados y solicitantes de asilo

6. Los acuerdos internacionales para el traslado de refugiados y solicitantes de asilo deben establecer estándares objetivos y jurídicamente exigibles en el tercer país para garantizar que los refugiados y solicitantes de asilo trasladados tengan acceso efectivo a la protección, asistencia y soluciones, tanto bajo las leyes y políticas nacionales del tercer país, como en la práctica. Tales acuerdos también deberían definir responsabilidades claras y exigibles del Estado que traslada.

7. Los acuerdos internacionales para el traslado de refugiados y solicitantes de asilo deberían incluir obligaciones por parte del tercer país de admitir a las personas trasladadas a su territorio y garantizar que se les otorguen estándares de trato acordes con la Convención de 1951, su Protocolo de 1967, y el derecho internacional de los derechos humanos.⁸ Esto incluye la garantía de ciertos derechos fundamentales, especialmente la obligación de respetar el principio de no devolución entre otros.⁹

⁸ Nota de orientación sobre los movimientos sucesivos irregulares de refugiados y solicitantes de asilo, nota 1 *supra*, párr. 20.

⁹ Bajo la Convención de 1951, nota 6 *supra*, otros derechos fundamentales incluyen: principio de no discriminación (Artículo 3); reconocimiento del estatuto personal y civil (Artículo 12); acceso a remedio efectivo (Artículo 16(1)); derecho de asistencia administrativa (Artículo 25); documentación de identidad (Artículo 27); documentación de viaje, particularmente para refugiados que se encuentren legalmente en el territorio (Artículo 28); transferencia de bienes (Artículo 30); no expulsión de refugiados que se encuentren legalmente en el territorio (Artículo 32); y no devolución (Artículo 33). Para los derechos restantes incluidos en la Convención, los estándares de trato otorgados a los refugiados son relativos al trato de otros no nacionales o nacionales que residen legalmente en el país. Los instrumentos internacionales de derechos humanos exigen que los Estados garanticen estándares básicos de trato. Véase: Comisión de Derechos Humanos de la ONU, *Los Principios de Siracusa sobre las Disposiciones de Limitación y Derogación en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*, 28 de septiembre de 1984, E/CN.4/1985/4, <https://www.refworld.org/es/leg/resol/unchr/1984/es/57200>. Además, el derecho internacional de los derechos humanos proporciona margen para la realización progresiva de ciertos derechos socioeconómicos, teniendo en cuenta los recursos disponibles del país en cuestión, los niveles de asistencia y cooperación internacional, la etapa de desarrollo económico y el bienestar general de la sociedad. Véase Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), *La índole de las obligaciones de los Estados Partes (art. 2, párr. 1). Observación General N° 3. E/1991/23*, 14 de diciembre de 1990, <https://www.refworld.org/es/ref/infortem/ceschr/1990/es/129827>.

8. Para los solicitantes de asilo trasladados a un tercer país seguro, el acuerdo también debería establecer obligaciones claras para garantizar la admisión al país¹⁰ y el acceso a un procedimiento de asilo estatal justo y eficiente en dicho país, asegurando una evaluación sobre el fondo de la solicitud de asilo y garantizando la estadía legal en el tercer país¹¹. Dichos procedimientos de asilo estatales podrían incluir una variedad de modalidades de tramitación de casos, tales como procedimientos simplificados, grupales o *prima facie*.¹² Cuando un solicitante de asilo transferido sea reconocido como refugiado o se considere que necesita protección internacional, el acuerdo también debería garantizar la concesión de una estadía legal en el tercer país.¹³ En casos que involucren refugiados previamente reconocidos, o beneficiarios de otras formas de protección internacional que sean trasladados a su primer país de asilo, el acuerdo debería garantizar que estas personas sean readmitidas, se les conceda estadía legal y puedan volver a acogerse a los derechos previamente otorgados o disfrutados en ese país, de conformidad con el derecho internacional.¹⁴

9. Los acuerdos internacionales para el traslado de refugiados y solicitantes de asilo también deberían establecer las obligaciones del Estado que traslada, antes y después de dichos traslados, incluyendo medidas para la ejecución del acuerdo, implementación de los traslados, y mecanismos de monitoreo del cumplimiento de lo estipulado por todas las partes (incluyendo el tercer país).

10. La existencia de un acuerdo de traslado de refugiados y solicitantes de asilo no exime al Estado que traslada de su responsabilidad continua de evaluar si las condiciones en el tercer Estado cumplen con los estándares contenidos en el acuerdo, tanto en derecho como en la práctica. Esta obligación se activa al concluirse el acuerdo y debe mantenerse durante toda su implementación.¹⁵ Con este fin, el Estado que traslada debe llevar a cabo un seguimiento regular para garantizar que los estándares acordados se cumplan de manera consistente en la práctica. El acuerdo también debería incluir una cláusula que requiera su suspensión o terminación en caso de que información fiable, incluyendo la del ACNUR, indique que no se están cumpliendo los estándares.

¹⁰ Consideraciones legales de 2018, nota 1 *supra*, párr. 4. Nota de orientación sobre los movimientos sucesivos irregulares de refugiados y solicitantes de asilo, nota 1 *supra*, párr. 18(a).

¹¹ El término "legalmente en", un término jurídico utilizado en la Convención de 1951, se refiere a los refugiados, incluidos los solicitantes de asilo, que se encuentran en el territorio de manera autorizada, incluso si están autorizados a permanecer solo de forma temporal, por ejemplo durante la duración de su procedimiento de asilo. Véase ACNUR, "*Lawfully Staying*" – A Note on Interpretation, 3 de mayo de 1988, <https://www.refworld.org/policy/legalguidance/unhcr/1988/en/27335>.

¹² Véase ACNUR, Directrices sobre Protección Internacional No. 11: Reconocimiento *Prima Facie* de la condición de Refugiado, HCR/GIP/15/11, 24 de junio de 2015, <https://www.refworld.org/es/pol/posicion/acnur/2015/es/105663>. Cuando ACNUR lleva a cabo la determinación del estatuto bajo su mandato, esto no puede considerarse equivalente a un procedimiento de asilo realizado por un Estado, véase Nota de Orientación sobre movimiento irregular posterior, nota 1 *supra*, párr. 19.

¹³ El término "estadía legal" también se refiere a los refugiados que están autorizados a permanecer en el país de acogida, incluso después del reconocimiento. Véase ACNUR, "*Lawfully Staying*" – A Note on Interpretation, nota 11 *supra*.

¹⁴ Consideraciones legales de 2018, nota 1 *supra*, párr. 3. Nota de orientación sobre los movimientos sucesivos irregulares, nota 1 *supra*, párrafos 18 y 33. Cuando un refugiado se ha trasladado desde un Estado que le ha concedido protección internacional, ese Estado mantiene obligaciones continuas hacia el individuo, a menos que su estatus haya cesado.

¹⁵ Esta obligación se basa en el principio de no devolución, que requiere que el Estado que traslada garantice que la persona que está siendo trasladada no corra un riesgo real de persecución u otras violaciones graves de los derechos humanos en el país receptor.

11. La posibilidad de trasladar a un individuo legalmente podría evaluarse, por ejemplo, a través de un procedimiento de admisibilidad u otro procedimiento acelerado regulado por ley. En cualquier caso, las personas deben tener, antes de su traslado, una oportunidad real de alegar que el tercer país no es seguro en sus circunstancias particulares, o que su traslado es ilegal; y tener acceso a un recurso efectivo para impugnar el traslado propuesto.¹⁶ Para algunas personas con perfiles específicos, vulnerabilidades o que pertenecen a grupos determinados, el tercer país puede no ser seguro. Esto incluye a personas en riesgo de violaciones de derechos humanos, así como a aquellas que podrían enfrentar barreras significativas para disfrutar de sus derechos o acceder a servicios básicos en el tercer país. Del mismo modo, cuando los solicitantes de asilo no son admitidos en el territorio del tercer país, y/o no tienen acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes; no deben ser trasladados y deben poder solicitar y disfrutar del asilo en el Estado de acogida actual. Asimismo, el traslado no sería lícito cuando, por ejemplo, vulnera el derecho a la vida familiar del que disfruta la persona trasladada en el Estado de acogida actual. Estos individuos no deben ser trasladados. En todos los casos en los que se esté considerando el traslado de niños, el interés superior del niño debe ser una consideración primordial.

Traslado de solicitantes de asilo a países seguros con los que no tienen ningún vínculo o conexión

12. Los traslados de refugiados y solicitantes de asilo deben ser sostenibles y razonables.¹⁷ Un vínculo o conexión significativa entre un solicitante de asilo y un tercer Estado no es obligatorio bajo el derecho internacional para permitir traslados,¹⁸ aunque puede mejorar su sostenibilidad y plausibilidad. En ausencia de un vínculo o conexión significativa con el país receptor, se necesitan medidas para garantizar la sostenibilidad del traslado, la dignidad de los solicitantes de asilo en el país receptor, incluyendo el apoyo a las perspectivas de autosuficiencia e inclusión, y el fortalecimiento de medidas encaminadas a compartir la responsabilidad.

13. Los estándares aplicables a la seguridad del tercer país y otras salvaguardas y garantías para los acuerdos de traslado de refugiados y solicitantes a un país donde el solicitante de asilo sí tiene un vínculo —como se establece en los párrafos 4 a 11 anteriores— se aplican igualmente en relación con los traslados a un país donde el solicitante de asilo no tiene un vínculo. En resumen, sería necesario que hubiera garantías de acceso a un procedimiento de asilo justo y eficiente, de trato conforme a las normas internacionales, y de protección internacional para aquellos que se determine que necesitan dicha protección. El tercer país debe ser uno que se considere seguro para el solicitante de asilo trasladado y donde pueda encontrar protección internacional que sea accesible y efectiva.

¹⁶ El derecho internacional reconoce la obligación de los Estados de garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades sean vulnerados tenga un recurso efectivo ante una autoridad competente, véase, por ejemplo, el Artículo 2(3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y el Artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Además, las transferencias sin la posibilidad de una evaluación individual también pueden constituir una violación de la prohibición de expulsión colectiva bajo, entre otros, el Artículo 13 del PIDCP, el Artículo 4 del Protocolo 4 del CEDH, el Artículo 12(5) de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos y el Artículo 22(9) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¹⁷ Conclusión del Comité Ejecutivo No. 15(XXX) de 1979, *Refugiados Sin País de Asilo*, párr. (h)(iv), <https://www.refworld.org/es/pol/excomcon/excom/1979/es/49457>. Véase también Consideraciones legales de 2018, nota 1 *supra*, párr. 6 y Nota de orientación sobre los movimientos sucesivos irregulares de refugiados y solicitantes de asilo, nota 1 *supra*, párrs. 14, 15 y 23.

¹⁸ ACNUR 2018 Consideraciones Jurídicas, nota 1 anterior, párr. 6. Nota de orientación sobre los movimientos sucesivos irregulares de refugiados y solicitantes de asilo nota 1 *supra*, párr. 23.

Fortalecimiento de la responsabilidad compartida y la cooperación internacional

14. Los acuerdos internacionales de traslado de refugiados y solicitantes de asilo deberían servir para compartir eficazmente las responsabilidades de las obligaciones de protección internacional de refugiados. Además, deberían contribuir a la gestión eficaz de los movimientos de refugiados y ayudar a ampliar el espacio general de protección, tanto en el Estado que traslada como en el Estado receptor, así como en las regiones más amplias en las que se sitúan estos Estados concernidos. La participación con las organizaciones intergubernamentales regionales pertinentes podría facilitar aún más la cooperación y las respuestas regionales, aprovechando los marcos de movilidad humana existentes para regular los traslados. Tales organizaciones y marcos podrían facilitar el diálogo y enfoques coordinados sobre respuestas integrales a los traslados de refugiados y solicitantes de asilo, y promover la armonización regional de estándares y sistemas estatales inclusivos, ampliando el espacio general de protección en la región.

15. Para garantizar la legalidad y eficacia de los acuerdos internacionales de traslado de refugiados y solicitantes de asilo y fomentar el compromiso constructivo con los Estados socios, dichos acuerdos deben basarse en los principios de responsabilidad compartida y cooperación internacional, tal como se articulan en la Convención de 1951 y el Pacto Mundial sobre los Refugiados.¹⁹ Los acuerdos de traslado también deberían respetar el derecho a buscar y disfrutar del asilo.²⁰ Estos objetivos pueden lograrse mediante disposiciones en el acuerdo de traslado que incorporen los siguientes elementos:

- Apoyo financiero y material oportuno, predecible, adecuado y sostenible al tercer país,²¹ para permitirle garantizar que los refugiados y solicitantes de asilo, junto con los miembros de las comunidades de acogida, tengan acceso a estándares adecuados de trato y servicios básicos.
- Una distribución equitativa de refugiados entre los Estados²² participantes, teniendo en cuenta el hecho de que los Estados de ingresos bajos y medios acogen a la mayoría de los refugiados del mundo. Por ejemplo, se alienta a los Estados participantes con menos refugiados a asumir la responsabilidad de los refugiados a través del reasentamiento y vías complementarias.²³
- Apoyo para el desarrollo adicional de los sistemas estatales de asilo en terceros países para garantizar procedimientos justos y eficientes, así como el desarrollo de

¹⁹ Convención de 1951, nota 6 *supra*, Preámbulo, párr. 4. Asamblea General de la ONU, *Pacto Mundial sobre los Refugiados*, 2018, párr. 14, www.refworld.org/legal/agreements/unga/2018/en/124198.

²⁰ *Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)*, Artículo 14.

²¹ *Ibid.*, párrs. 14 y 32. Esto es particularmente importante cuando el país receptor es uno de los países de ingresos bajos y medios que acogen al 73% de los refugiados del mundo, véase: ACNUR, *Informe de Tendencias Globales 2024*, <https://www.unhcr.org/global-trends-report-2024>.

²² Convención de 1951, nota 6 anterior, Preámbulo, párr. 4, considerando que “la concesión del derecho de asilo puede resultar excesivamente onerosa para ciertos países y que la solución satisfactoria de los problemas cuyo alcance y carácter internacionales han sido reconocidos por las Naciones Unidas no puede, por esto mismo, lograrse sin solidaridad internacional”.

²³ Pacto Mundial sobre Refugiados, nota 19 *supra*, párrs. 18, 21, 23, 90-96.

sistemas estatales inclusivos en áreas como educación, salud, vivienda, empleo y protección social como parte de los esfuerzos para apoyar respuestas sostenibles.²⁴

16. Los Estados que trasladan refugiados y solicitantes de asilo a terceros países, deben seguir respetando el derecho a buscar y disfrutar del asilo y no pueden renunciar a la responsabilidad en lo que respecta a los solicitantes de asilo que buscan protección en sus fronteras o en su territorio. Los acuerdos internacionales de traslado no son legales cuando constituyen, total o parcialmente, un intento por parte de un Estado de despojarse de sus obligaciones legales internacionales, por ejemplo con respecto a los refugiados *sur place*, refiriéndose a personas que no eran refugiadas cuando abandonaron su país de origen, pero se convirtieron en refugiadas en una fecha posterior.²⁵ Una práctica por parte de un Estado que se desprenda completamente de sus obligaciones jurídicas internacionales, equivaldría a la externalización de las obligaciones del derecho de refugiados, y sería contraria al derecho internacional.²⁶ El ACNUR ha advertido que este puede ser el caso cuando los acuerdos de traslado carecen de salvaguardas adecuadas para garantizar el acceso efectivo a la protección internacional, en relación a lo dispuesto en esta guía, y transfieren injustamente la carga de identificar o abordar las necesidades de protección internacional a otro Estado o dejan sin atender las necesidades de protección internacional de las personas trasladadas.

El papel del ACNUR en relación con los acuerdos internacionales de traslado de refugiados y solicitantes de asilo

17. En consonancia con el mandato del ACNUR, particularmente su competencia para promover la celebración de convenios internacionales para la protección de los refugiados y abogar por la admisión de refugiados en los territorios de los Estados,²⁷ el ACNUR puede desempeñar un papel importante en el apoyo a la celebración e implementación de acuerdos internacionales de traslado de refugiados y solicitantes de asilo. A través del compromiso constructivo con los Estados y otras partes interesadas, ACNUR puede fomentar la cooperación internacional, mejorar la eficacia y sostenibilidad de los acuerdos de traslado, mejorar la autosuficiencia y resiliencia de los refugiados, y promover la gestión basada en derechos y eficaz de los movimientos de refugiados.

²⁴ Las respuestas sostenibles son estrategias lideradas a nivel nacional que promueven la autosuficiencia y apoyan soluciones duraderas desde el inicio, al tiempo que impulsan el reparto de responsabilidades en toda la comunidad internacional. Ayudan a promover los objetivos del Pacto Mundial sobre los Refugiados: aliviar la presión sobre los países de acogida, mejorar la autosuficiencia, ampliar el acceso a soluciones de terceros países y apoyar las condiciones en los países de origen para un retorno seguro y digno. Véase Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, *Respuestas sostenibles*, EC/76/SC/CRP.17, 11 de junio de 2025, <https://www.unhcr.org/media/sustainable-responses-93rd-meeting-standing-committee>.

²⁵ ACNUR, *Manual sobre Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado y Directrices sobre Protección Internacional bajo la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados*, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, abril 2019, párrs. 94-96, <https://www.refworld.org/es/pol/posicion/acnur/2019/es/123881>.

²⁶ La “externalización” se refiere a las medidas adoptadas por los Estados —de forma unilateral o en cooperación con otros Estados— que implican salvaguardas inadecuadas para garantizar la protección internacional, así como el traslado de la responsabilidad de identificar o satisfacer las necesidades de protección internacional a otro Estado o dejar tales necesidades sin atender, lo que hace que dichas medidas sean ilegales. Véase ACNUR, *Nota del ACNUR sobre la “Externalización” de la Protección Internacional*, 28 de mayo de 2021, <https://www.refworld.org/es/pol/posicion/acnur/2021/es/121534>.

²⁷ Asamblea General de la ONU, *Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados*, 14 de diciembre de 1950, A/RES/428(V), <https://www.refworld.org/es/leg/trat/agonu/1950/es/72586>, párrs. 8(a) y 8(d).

18. Específicamente, el papel del ACNUR en promover la adhesión de los Estados a los principios y estándares de la protección internacional al estipular e implementar acuerdos de traslado puede incluir:

- asesorar a los Estados y organizaciones regionales sobre el desarrollo de acuerdos internacionales de traslado;
- brindar orientación a los Estados sobre el alcance y los términos de los acuerdos de traslado para garantizar el cumplimiento de las normas jurídicas internacionales, así como de los principios de responsabilidad compartida y cooperación internacional;
- asesorar a los Estados sobre las reformas requeridas en los marcos legales nacionales para permitir la implementación y aplicación efectiva de los acuerdos de traslado;²⁸
- facilitar y/o participar en negociaciones de acuerdos de traslado entre Estados;
- supervisar la implementación de los acuerdos de traslado y asesorar según corresponda a los Estados participantes, incluso, cuando sea pertinente, acerca de la suspensión o terminación de los acuerdos;
- proporcionar asesoramiento jurídico y práctico, incluso a través de socios, a las personas refugiadas y solicitantes de asilo sujetas a los acuerdos de traslado, especialmente mediante mecanismos de comunicación con las comunidades efectivos;
- apoyar a los refugiados en la recuperación del estatus legal que poseían anteriormente en el tercer país —con base en el acuerdo formal por medio del cual el tercer país se compromete a su admisión en el territorio²⁹—, incluso a través de la renovación de permisos de residencia caducados, retirados o perdidos;
- considerando que el tercer país debe facilitar el acceso a la documentación y a derechos y servicios esenciales, así como garantizar la atención de las necesidades inmediatas y de condiciones adecuadas de recepción, el ACNUR puede brindar apoyo según sea pertinente.
- apoyar el desarrollo de la capacidad de asilo en los Estados participantes para garantizar el acceso a procedimientos de determinación de la condición de refugiado justos y eficientes;
- apoyar el desarrollo de sistemas estatales inclusivos para garantizar el acceso a la educación, el empleo, la vivienda, la atención sanitaria y la protección social, entre

²⁸ Relevante a este respecto es la responsabilidad de supervisión del ACNUR bajo el párrafo 8(a) de su Estatuto, nota 27 *supra*, así como la obligación de los Estados Partes de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 de cooperar con el ACNUR y facilitar su responsabilidad de supervisión, particularmente en relación con las leyes, reglamentos y decretos de los Estados. Véase el Artículo 35 de la Convención de 1951, nota 6 *supra*, y el Artículo II del *Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados* (31 de enero de 1967) 606 UNTS 267, <https://www.refworld.org/es/leg/trat/agonu/1967/es/41400>.

²⁹ Nótese que la admisión al territorio es una precondition para que un acuerdo de traslado sea legal (véase párrs. 7-10).

otras áreas, mientras se coordinan con los socios los esfuerzos para abordar el bienestar de los refugiados y solicitantes de asilo;³⁰

- facilitar el acceso a soluciones para los refugiados, incluso a través del reasentamiento y vías complementarias; y
- administrar fondos para apoyar la implementación de los acuerdos de transferencia.³¹

ACNUR
7 de agosto de 2025

³⁰ Estatuto del ACNUR, nota 27 *supra*, párr. 8(i).

³¹ *Ibíd.*, párr. 10.